



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

**EXPTE.86.206/2019**

**“GAVETECO SA c/ADMINISTRACION NACIONAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excm. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

**LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:**

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de la Sala en virtud de la impugnación presentada por GAVETECO SA contra la Resolución de AFIP 05/2019 que determinó la existencia de deuda por falta de aportes y contribuciones de Seguridad Social respecto a distintos trabajadores que desarrollaban tareas, en su beneficio durante los periodos comprendidos entre el 07/2008 a 01/2017; 01/2010 a 12/2011; 05/2012 a 04/2014 y 12/2014 a 02/2016. La infraccionada rechaza el reclamo. Expresa que las personas que se encontraron trabajando en momentos en que se llevó a cabo la inspección realizada por funcionarios de AFIP no son sus dependientes, sino que se trata de socios de la Cooperativa de Trabajo San Francisco Ltda. como así también personal de distintas PyMES, dedicadas a la prestación de mano de obra en el procesamiento de pescado que a través de distintos contratos de locación de servicios están vinculadas con su empresa, motivo por el cual y al no tratarse de personal dependiente suyo no puede exigírsele que efectúe aportes y contribuciones a su respecto, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución que impugna.

La impugnante no efectúa el depósito previo impuesto por el art. 15 de la ley 18.820 argumentando severas dificultades económicas que le imposibilitan dar cumplimiento a dicha exigencia legal, por lo que plantea la inconstitucionalidad de la norma.

A efectos de acreditar sus afirmaciones acompaña una certificación expedida por contador público y estado patrimonial referida a la no disponibilidad de la suma requerida. Para el supuesto de desconocimiento de tal documento ofrece pericial contable supletoria y solicita se libre oficio al juez de turno de la Ciudad de Mar del Plata a fin que designe perito contador para que se expida sobre si los libros son llevados en legal tiempo y forma, y si contaba la empresa





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

con fondos suficientes como para hacer frente a la suma de \$ 28.978.818,53 en cumplimiento con la exigencia prevista por el artículo 15 de la ley 18.820.

Desde el punto de vista formal **propiciaré la habilitación** de la instancia judicial por cuanto si bien en nuestro derecho positivo, la regla solve et repete ha sido considerada congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la CN y 8° del Pacto de San José de Costa Rica, el más Alto Tribunal de la Nación dispuso atenuar su rigurosidad en aquellos casos en que exista una desproporcionada magnitud entre la suma que el contribuyente debe ingresar y su concreta capacidad económica (conf. CSJN 21/12/89 “Micrómnibus Barrancas de Belgrano” Fallo 312:2490; 11/06/98 “Cadesu Cooperativa de Trabajo Ltda. c/DGI” Fallo 312:1741; 02/08/05 “Centro Diagnóstico de Virus SRL c/AFIP” Fallo 328:2938). Ello así y en salvaguarda del debido derecho de defensa procederé a analizar el fondo de la cuestión sometida a conocimiento del Tribunal.

La actora en su memorial rechaza las imputaciones formuladas por el organismo fiscal.

Concretamente cuestiona por irregular todo lo actuado en sede administrativa. Considera lesionado su derecho de defensa en juicio, tacha de irregulares las actas que dieron origen a estos obrados entendiendo que AFIP no resolvió la totalidad de los planteos formulados por su parte por lo que la resolución recaída deviene en nula por vicio en el procedimiento y en el objeto. Entre las consideraciones que efectúa afirma que no puede seguirse la presente causa con su parte únicamente ya que debió integrarse con la Cooperativa de Trabajo San Francisco Ltda. y las sociedades anónimas Cuatro ESE, Tuten, Alufish MDQ, Ilithyia, Conorae Borealis y Viento Solar respecto de cuyos asociados o empleados versa el presente caso, toda vez que el personal inspeccionado no es dependiente suyo. Explica que el acto administrativo recurrido es el resultado de un procedimiento viciado pues los relevamientos efectuados se realizaron sin la debida notificación a su parte, extremo que le impidió controlar la prueba rendida así como también realizar las preguntas que podía considerar oportunas. La decisión administrativa es arbitraria por ser el resultado de construcciones sin fundamento jurídico alguno.

En su memorial de agravios la apelante se centra en señalar que los asociados de la cooperativa manifiestan en sus declaraciones que son asociados de Cooperativa de Trabajo San Francisco Ltda. que utilizan elementos propios para realizar las tareas y que siguen a tales fines instrucciones del capataz de la cooperativa y el hecho que la cooperativa tenga un capataz no convierte a sus asociados en empleados.

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#34063256#350782586#20230426105911830



## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Por otra parte señala que si bien el personal de las sociedades anónimas involucradas prestan servicios en un domicilio suyo ello no transforma al titular del establecimiento en empleador pues se trata simplemente de la tercerización de algunas tareas específicas.

Culmina afirmando el impugnante que las presuntas irregularidades detectadas por el organismo no son tales. La resolución objeto de cuestionamiento se fundamenta únicamente en declaraciones de terceras personas que no han declarado bajo juramento de decir verdad y que lo han hecho sin el debido contralor de su parte lo que le resta credibilidad.

En respuesta al planteo de la actora, el organismo expresa que en autos se configura un claro incumplimiento a la normativa laboral pues, ante el reclamo fiscal la encartada objetó el mismo pero sin ofrecer prueba relevante que determine la veracidad de los hechos expuestos como defensa. Se limita a manifestar que ha sido violentado su derecho de defensa pero sin considerar que en la causa no estaba en discusión que la Cooperativa de Trabajo San Francisco Ltda. estuviera inscripta y autorizada para funcionar sino que lo observado es la maniobra de GAVETECO SA para asociarse a dicha cooperativa en fraude a la ley laboral.

Idéntica situación se configura con las seis PyMES utilizadas para la realización de tareas propias y específicas de la actividad de la impugnante a través de contratos de locación de servicios que enmascaran un claro y típico fraude laboral.

Al respecto el organismo señala que en los contratos de locación suscriptos existe una cláusula por la cual GAVETECO SACIFeI se constituye en garante solidario de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el contrato de locación del local de la calle Gianelli (cuerpo de actuación 11900-632-2016). El producto terminado, según refiere el personal inspeccionado estaba destinado exclusivamente a la impugnante.

También expresa la demandada que las sociedades involucradas carecen de bienes de uso propios, que los dependientes utilizaban materiales provistos por la impugnante y que la ropa de trabajo utilizada también era suministrada por GAVETECO SA (ver fs. 3924/3931).

Aclarado lo anterior, y consultada la página web de la impugnante, surge que la empresa Gaveteco SACIFeI es una empresa de importancia en materia pesquera dedicada a la extracción, procesado, industrialización, comercialización y distribución de frutos de mar. Desde el principal puerto de Mar del Plata, satisface la demanda interna de nuestro país pudiendo además exportar a otros países.





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Resulta llamativo que una empresa de importancia en el ramo de que se trata, se encuentre vinculada con la Cooperativa de Trabajo San Francisco Ltda.y diferentes PyMES dedicadas a suministrar mano de obra para tareas de procesado de pescado, sin poseer personal propio para realizar todas aquellas tareas que resultan indispensables para cumplir su finalidad, más aún si se tiene presente el amplio objeto para el cual fue constituida (elaboración, conservación y comercialización de productos marinos, llegando a exportar sus productos a otros países).

Analizadas las pruebas obrantes en la causa, entiendo aplicable en el presente caso el principio de primacía de la realidad, en virtud del cual, y siguiendo reiterada jurisprudencia del Supremo Tribunal de la Nación, hay que indagar la verdad material por encima de la formal, y es tarea fundamental que corresponde al servicio de justicia desentrañar dicha verdad por sobre las apariencias (conf. CSJN Fallos 288:55; 292:211, 418,485; 295:948; 296:356, 650,729).

Cabe recordar que el principio de primacía de la realidad es de aplicación constante en materia laboral y de seguridad social pues la desigualdad entre las partes determina que tal contrato, con frecuencia no responda a la realidad y encierre cláusulas que busquen la evasión total o parcial de las normas imperativas del Derecho Laboral y de la Seguridad Social (conf. Plá Rodríguez, Américo “Los principios del Derecho del Trabajo” pág. 263; Hierrezuelo, Ricardo D. y Nuñez, Pedro F. “Responsabilidad solidaria en el contrato de trabajo” pag. 93). En el caso se configura, precisamente, tal situación pues la apelante reconoce tener algunos empleados propios pero lo cierto es que, en lo esencial, los que utiliza para su emprendimiento ictícola –es decir la pesca, elaboración, procesamiento, venta y exportación de pescado y mariscos- le son ajenos y se presentan como asociados de una cooperativa o dependientes de terceras empresas que, prima facie, no tendrían actividad productiva propia y se limitarían a contratar a sus dependientes en favor de la demandada.

Es dable recordar, en tal sentido, que la mano de obra de las seis pymes involucradas y la Cooperativa de Trabajo San Francisco Limitada es usufructuada en la sede de la cooperativa involucrada -Ayolas esquina Gianelli- y en la sede fiscal, comercial, industrial y administrativa de GAVETECO, esto es la plata de la calle Valentini de la Ciudad Mar del Plata, lo que revela que, en realidad, los operarios contratados para la realización de la tarea se encuentran bajo la dependencia jurídica y económica de la recurrente.

La contratación fraudulenta de trabajadores mediante el uso de “hombres de paja” o testaferros es puesta en jaque por el artículo 29 de la LCT que sobre el





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

particular establece que los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice sus servicios. En tal supuesto, y cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y las que se deriven del régimen de seguridad social.

Cabe recordar que el decreto 2015/94, veda la posibilidad que las cooperativas de trabajo, para el cumplimiento de su objeto social, provean la contratación de servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados.

Ahora bien, la aplicación de lo dispuesto por el art. 14 de la LCT -denuncia de fraude laboral- pueden servir para tipificar correctamente las relaciones bajo el marco del derecho laboral.

La jurisprudencia, por su parte, tiene establecido que no puede alterarse la estructura laboral con el pretexto de la existencia de actos cooperativos y privar de la tutela respectiva al personal, actuando las cooperativas de trabajo como colocadoras de personal para terceros, resultando aplicable el artículo 29 de la LCT. Ello torna inválida la defensa del recurrente que, a efectos de eximirse de su responsabilidad, aduce que los trabajadores afectados no son empleados sino asociados a una cooperativa de trabajo, toda vez que como consecuencia de dicha aplicación, los trabajadores relevados serán considerados sus empleados directos por haber utilizado sus prestaciones (CFSS Sala I “Alcain, Gustavo c/Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social” sent. del 30/06/10).

También se ha expresado que las cooperativas de trabajo no pueden actuar como empresas de servicios eventuales, es decir, como colocadoras de personal en terceros establecimientos, pues esta es una forma sencilla de alterar toda la estructura de la ley laboral y de privar de la tutela respectiva al personal, so pretexto de la existencia de actos cooperativos entre el trabajador y la empresa donde presta servicios y, si el trabajador fue destinado a prestar servicios en una empresa por intermedio de una cooperativa de trabajo, se torna aplicable lo normado por el artículo 29 de la ley de contrato de trabajo y, por ello, el trabajador será considerado empleado directo de quien utilice su prestación, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto concierten los terceros contratantes y la empresa para la cual el trabajador preste servicios.(CFSS Sala III “Consorcio Edificio 11 de abril 142/148/150/152 c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” sent. del 13/09/11).





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Cabe tenerse presente que se ha considerado operativa la directiva del art. 102 LCT en sede previsional ante situaciones de fraude al detectarse la intermediación laboral a través de empresas ficticias apoyadas en supuestos contratos de locación de obra que no son tales (conf. esta Sala sent. del 23/03/2012 “Santa Cruz Lanas SRL c/Administración Federal de Ingresos Públicos s/Impugnación de Deuda”).

Planteada así la cuestión y quedando acreditado la estrecha relación entre las tareas realizadas por los trabajadores inspeccionados y la actividad específica de la impugnante es que entiendo debe confirmarse la resolución recurrida.

Sin perjuicio de lo anterior debo destacar que la parte actora puso en conocimiento del Tribunal que las obligaciones de capital e intereses correspondientes a los periodos y conceptos reclamados en el acto administrativo que aquí se impugna se encuentran ingresadas en planes de pago vigentes (ver fs. 39994, 3997/98).

Corrido el pertinente traslado, la demandada expreso que “se verificó la presentación de un plan en carácter de responsable solidario Ley 27.653 de fecha 25/03/2022 de Gavensky Marcelo por \$23.200.479,30 regularizando saldos de aportes y contribuciones de Seguridad Social correspondientes a los periodos fiscales 2007/11 a 2019/06 encontrándose, a la fecha, vigente con 5 cuotas pagas.....la condonación de las multas se encuentra sujeta a la cancelación total de cada plan de pagos”, lo que deberá ser tenido en cuenta y descontarse del total de la suma reclamada y que aún se adeuda.

En virtud de lo expuesto las costas se impondrán a la parte actora (art. 68 CPCCN), regulando los honorarios correspondientes a su representación letrada, en 10 UMA (\$149.330), y en 15 UMA (\$223.995) los que retribuyen la tarea realizada por la representación letrada de la parte demandada, conf. CSJN Ac. 09/2023.

En definitiva propongo se haga lugar a la habilitación de la presente instancia, confirmando la resolución recurrida. Arribadas las actuaciones a sede administrativa deberá considerarse las sumas aun adeudadas, dada la adhesión al plan de facilidades de pago efectuada. Las costas se impondrán a la apelante (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 10 UMA (\$ 149.330) y en 15 UMA (\$ 223.995) los correspondientes a la dirección letrada de la demandada, CSJN. Acordada 09/2023.

**EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:**

Adhiero al voto de la Dra. Nora Carmen Dorado.

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#34063256#350782586#20230426105911830



Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

**EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:**

Adhiero a la propuesta de mis colegas de Sala.

Por todo lo expuesto el Tribunal **RESUELVE:** 1º) Habilitar la presente instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Arribadas las actuaciones a sede administrativa deberá considerarse las sumas aun adeudadas, atento la adhesión al plan de facilidades de pago efectuada, 4º) Imponer las costas a la apelante (art. 68 CPCCN), 5º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 10 UMA (\$ 149.330) y en 15 UMA (\$ 223.995) los correspondientes a la dirección letrada de la demandada, CSJN. Acordada 09/2023. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

WALTER F. CARNOTA  
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO  
Juez de Cámara

JUAN FANTINI ALBARENQUE  
Juez de Cámara

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI  
Secretaria de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

